

Las OPAS aseguran que la Agenda 2000 será muy negativa

Afectará, especialmente, a los cultivos herbáceos y al vacuno de carne en Extremadura

Los planteamientos de la Agenda 2000 y la incorporación de los países del Este a la Unión Europea serán los grandes caballos de batalla a los que tendrá que enfrentarse la agricultura extremeña en el año 2000. Todos los dirigentes agrarios de Extremadura coinciden en afirmar que la entrada en vigor de la próxima reforma dibuja un panorama oscuro para el sector de la agricultura regional.

Según el secretario regional de ASAJA, Alfonso Sánchez-Ocaña, toda la reforma pende de un hilo y serán los ministros de Economía de la UE los que tendrán que decidir si se vuelven a estudiar o no las medidas contempladas en el llamado Paquete Santer y en la Agenda 2000. A juicio de Sánchez-Ocaña, el recién constituido gabinete de altos cargos comunitario será el encargado de estudiar el actual sistema de financiación ante la tentativa de algunos países miembros de reducir el gasto comunitario y, por consiguiente, disminuir las ayudas comunitarias a los países más desfavorecidos.

«El futuro para Extremadura será malo y la Agenda 2000 tendrá efectos muy negativos para nuestra región y afectará, especialmente, a los cultivos herbáceos y al vacuno de carne», indicó el secretario regional de ASAJA-Extremadura, al tiempo que dio por sentada una bajada progresiva de las ayudas por superficie de cereales, oleaginosas y proteaginosas. Sánchez-Ocaña está convencido de que el problema endémico de Extremadura son los rendimientos base, ya que mientras la media nacional se cifra en torno al 2,6%, en la región extremeña es de 1,8%, con lo que la subida prevista para las ayudas a los cultivos herbáceos no se dejará notar en Extremadura al registrar un rendimiento base tan bajo.

«Vamos a ser muy poco competitivos en comparación con otras regiones, especialmente en el maíz, cuyo futuro es muy negro, al igual que en el resto de los cereales de secano», advirtió Sánchez-Ocaña, para quien la solución a este problema pasa por una dedicación de la producción cerealista de la región al consumo interior regional.

Para esta organización agraria, la firma de un acuerdo interprofesional entre productores y transformadores favorecería el que las más de 500.000 toneladas de grano que se producen anualmente en Extremadura se comercializaran íntegramente en la región, con destino a piensos y compuestos cuya base es el cereal. «Con ello se conseguiría pagar mejores precios al agricultor y beneficiaría al ganadero, incidiendo en una mayor competitividad», explicó Sánchez-Ocaña.

El resto de los cultivos regionales como el tabaco o el tomate, según ASAJA, al estar contingentados, tienen garantizado el futuro en sus respectivas OCM. Sin embargo, la organización agraria cree necesario que haya una «discriminación positiva» de las ayudas a favor de los Agricultores a Título Principal (ATP) e insiste en reclamar que estas ayudas para los profesionales, «por ser los valedores del mundo rural, son los que fijan la renta y la población en el mundo rural y generan y mantienen los puestos de trabajo».



Alfonso Sánchez-Ocaña, secretario regional de ASAJA.

La opinión de UPA

Para el máximo responsable regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Extremadura, Lorenzo Ramos, la próxima incorporación de los países del Este (PECOS) en la Unión Europea provocará que aumente el número de agricultores, con lo que, a su juicio, será necesario plantear un reparto más social de las ayudas comunitarias.

Para Ramos las grandes explotaciones, al ser más competitivas, son las que más dinero están recibiendo de Europa, cuando deberían ser las pequeñas y medianas explotaciones las más beneficiadas por ser «ayudas destinadas a paliar la pérdida de renta». En su opinión, las pequeñas explotaciones son las que registran mayor pérdida de renta, a pesar de ser elementos clave en la creación de puestos de trabajo en el sector agrario y en el mantenimiento de la población rural, «por lo cual las ayudas comunitarias deberían estar dirigidas al mantenimiento de este tejido rural».

En Extremadura, según Ramos, más del 80% de las explotaciones agropecuarias son pequeñas y medianas, lo cual justifica plenamente el establecimiento de un sistema diferenciador de ayudas que beneficie especialmente a los pequeños agricultores, «ya que este tipo de explotaciones corren el riesgo de desaparecer», añadió.

Por otra parte, el responsable de UPA-Extremadura destacó la bajada de los precios de intervención de los cereales y se refirió al



Lorenzo Ramos, responsable regional de UPA.

«delicado» momento que está atravesando el cultivo del maíz, «que ha dejado de ser un cultivo rentable por los bajos precios que se están pagando», y el cultivo del tomate, que, asimismo, ha experimentado una espectacular bajada de precios, a pesar de la subida de sus costes de producción.

«Creemos que la Organización Común de Mercado (OCM) de Frutas y Hortalizas ha sido mala y reclamamos que se vuelva a reformar y se establezca un sistema de cuotas similar al del cultivo del tabaco. Ahora son las industrias transformadoras de tomate las que tienen las cuotas y tienen patente de corso para firmar contratos con quien les dé la gana. Es imprescindible que las cuotas se den a los productores», apuntó Ramos.

Con respecto a los cultivos herbáceos, Ramos cree que las perspectivas de la Agenda 2000 son malas, porque bajan los precios de intervención y la compensación por rendimientos no amortizará las pérdidas. Finalmente, advirtió del peligro de desaparición de las oleaginosas si no se equipara la ayuda diferencial a la del girasol.



José Javier García Cuadrado, presidente de Iniciativa Rural (Cáceres)

Iniciativa Rural

En similares términos se expresó el presidente provincial de Iniciativa Rural (IR) de Cáceres, José Javier García Cuadrado, al opinar sobre el futuro de la agricultura en Extremadura. García Cuadrado cree que la disminución de las ayudas y de los precios agrarios exige con urgencia un nuevo sistema de repartos «que impida la desaparición de las explotaciones familiares».

Para García Cuadrado, las ayudas comunitarias tienden a favorecer a las grandes explotaciones y la tecnificación de las mismas, en detrimento de otras ayudas a planes de incorporación al sector agrario y al mantenimiento de las explotaciones.

«Defendemos el sistema de explotación familiar y no queremos bailar al son de las multinacionales, que son competitivas a base de la miseria de otros», subrayó.

El presidente provincial de IR aseguró que una de las grandes contradicciones de la política comunitaria hace referencia al tema agroambiental, «pues mientras incentiva el mantenimiento de los cultivos tradicionales y de una agricultura respetuosa con el medio ambiente, por otro lado está permitiendo e incentivando la agricultura transgénica, que entra en clara contradicción con lo anterior».

García Cuadrado indicó que durante 1998 se sembraron en Extremadura 2.000 ha. de maíz transgénico y que este hecho conlleva muchos riesgos, ya que no sólo elimina la posibilidad de una agricultura biológica, sino que también cierra las posibilidades de una agricultura viable con el modelo tradicional de Extremadura.

«De seguir así, en pocos años se producirá un cambio bestial en la producción agraria de la región y lo peor de todo es que no sólo conlleva riesgos graves para la salud sino que, además, tendremos de competir con las grandes multinacionales americanas», dijo textualmente.

UCE-COAG

La Unión de Campesinos Extremeños (UCE-COAG) está convencida de que el paquete agrícola de la Agenda 2000 supondrá una nueva reconversión del sector agrario y su coordinador regional, José Cruz Llanos, reivindica una Política Agraria Comunitaria (PAC) como un instrumento igualitario que eleve el nivel de renta de los

agricultores y ganaderos que viven en el medio rural, «lo cual no coincide con los postulados de la Agenda 2000».

La UCE cree que la ampliación de la UE con los países PECOS no se puede financiar con los actuales presupuestos, ya que esto obligaría a recortar las ayudas agrícolas y las ayudas de cohesión. En este sentido, José Cruz considera necesario un incremento de las aportaciones de los Estados miembros que posibilite una incorporación plena y «no se haga a costa del presupuesto agrícola». A su juicio, si no hay agricultores en el medio rural no habrá desarrollo económico, por lo que las políticas sociales y económicas deberían estar orientadas a lograr una equiparación de los niveles de bienestar del medio rural con el medio urbano.

El coordinador regional recordó que su organización viene denunciando desde el año 1992 el reparto «absolutamente arbitrario» de las ayudas com-

pensatorias, «ya que no podemos aceptar que 429 explotaciones reciban lo mismo que 13.027 agricultores. Ante ello, defendemos que se tengan en cuenta para su reparto criterios como el empleo de prácticas medioambientales sostenibles, la calidad de los productos y el ejercicio de la actividad en zonas desfavorecidas».

Por otra parte, UCE-COAG reclama que el Gobierno español modifique su actual propuesta de modulación y desarrolle un modelo positivo de reparto de ayudas directas que contemple el empleo



José Cruz Llanos, coordinador regional de UCE-COAG.

como factor primordial, sin olvidar los criterios antes mencionados, «como única salida para avanzar en la búsqueda de una política agraria equilibrada que cohesionen las regiones y a los sectores y productores de la UE».

Además de estas claves, Cruz Llanos enumeró otras que son decisivas para el futuro del sector, tales como el mantenimiento de las explotaciones familiares agrarias, «únicas capaces de asegurar la sostenibilidad del sector», la modernización de las ex-

plotaciones para equipararlas a las de los países más avanzados de la Unión Europea y la necesaria articulación del «contrato entre los agricultores y la sociedad», que garantice el compromiso de producir alimentos de calidad, respetando el entorno y obteniendo el reconocimiento de la sociedad.

Finalmente, José Cruz advirtió que el sector agrario no puede permitirse el lujo de ampliar la cifra del millón de empleos registrado durante la última década, por lo que considera fundamental el compromiso político de las Administraciones para el necesario desarrollo de las estructuras agrarias, infraestructuras rurales, Plan Hidrológico Nacional y otro de regadíos que incluya medidas urgentes, entre otras cuestiones.

«La tradición, la identidad regional y la agricultura forman una unidad inseparable que nuestra organización defenderá siempre», matizó. ■ A. G. Periodista.